



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO: 11001-33-35-026-2018-00396-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ANA LUCÍA CARO CELIS
DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ANTECEDENTES

Ana Lucía Caro Celis promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo objeto principal se delimita a la nulidad de los actos administrativos, mediante los cuales se desconoce el derecho que tiene la demandante a percibir la Bonificación Judicial concedida mediante el Decreto 382 de 2013.

A través de providencia de fecha 23 de noviembre de 2018¹, éste Despacho Judicial admitió la demanda y ordenó el pago de gastos del proceso, así como la notificación personal del mentado proveído a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Procurador Judicial y al Fiscal General de la Nación.

Sin embargo, este Despacho Judicial **NO AVOCARÁ CONOCIMIENTO** del presente asunto, por las siguientes,

CONSIDERACIONES

Los artículos 130 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encargaron de consagrar las causales generales y especiales de impedimento de los Jueces y Magistrados en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de establecer el procedimiento en caso de evidenciarse la configuración de alguna de aquellas; los mentados enunciados normativos disponen:

¹ Folio 33

Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil² (...)

Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.

(...)

7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son susceptibles de recurso alguno.”

A su vez el artículo 141 del Código General del Proceso, determina las hipótesis en las cuales los magistrados y jueces de la república, deben declararse impedidos por encontrarse incurso en causales de recusación. En efecto dispone la norma:

“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.”

En mi condición de titular del Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, debo señalar que se configura la causal de impedimento general frente a la integridad de los Jueces Administrativos en razón a que los **Decretos 382 y 383 de 2013**, por medio de los cuales se creó la bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar respectivamente, incluyó dentro de los destinatarios de la mentada bonificación a los Jueces categoría circuito,

² Debe entenderse la remisión normativa al Código General del Proceso.

determinando las condiciones para su reconocimiento y la forma de remuneración en los siguientes términos:

“Artículo 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 10 de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las Siguietes tablas, así:

(...)

3. Para los cargos de los Juzgados de Circuito, Especializado, Juzgados de Tribunal Penal Militar y Juzgados de Justicia Penal Militar, relacionados a continuación la bonificación judicial, será:

| Denominación cargo | Monto de la bonificación judicial a pagar mensualmente cada año | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 |
| Juez Circuito | 539.991 | 1.059.365 | 1.578.739 | 2.098.112 | 2.617.486 | 3.136.860 |

(...)

Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes. A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior. En el evento en que la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente. Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.”

Igualmente debe señalarse que los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá percibimos la bonificación judicial y que en virtud de esa

circunstancia nos asiste interés directo en los resultados del proceso, pues se considera legítima la reclamación relativa a que dicho emolumento sea constitutivo de salario para la liquidación de prestaciones sociales y todas las prestaciones económicas derivadas de la actividad de administración de justicia por lo que se configura la causal de impedimento colectivo.

Es claro que el hecho constitutivo de ser destinatarios de la misma prestación laboral comprometen mi imparcialidad como administrador de justicia, circunstancia por la cual y al margen de la configuración de la segunda causal de impedimento indicada, debe entenderse que la declaratoria individual de impedimento tiene alcance colectivo por encontrarse los demás Jueces Administrativos bajo las mismas circunstancias de carácter general, por lo que se pone a consideración del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el impedimento expresado en la presente providencia y en consecuencia se separe del conocimiento del asunto a los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá.

Ahora y en gracia de discusión, si bien es cierto la bonificación judicial planteada en el presente asunto tiene que ver con un funcionario que pertenece a la Fiscalía General de la Nación y no a la Rama Judicial, también lo es, que la decisión tomada en este proveído, tiene asidero jurídico en virtud de lo resuelto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia de fecha 4 de marzo del presente año³, que dispuso aceptar el impedimento manifestado por los Jueces Administrativos de Girardot, bajo el argumento adoptado por el Órgano Máximo de la Jurisdicción Contenciosa que declaró fundado los impedimentos manifestados por los Consejeros pertenecientes a la sección segunda⁴, teniendo en cuenta, que si bien es cierto la bonificación de que trata el Decreto 382 de 2013, fue creada para los funcionarios pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, la decisión que se pueda adoptar, podría afectar indirectamente a los Magistrados de esa Corporación a la hora de calcular la base de liquidación de la pensión de vejez, habida consideración que han percibido durante toda su vida laboral la mentada bonificación.

Por lo tanto, y como quiera que existe un precedente judicial respecto de los impedimentos manifestados cuando se reclama la Bonificación Judicial de que trata el Decreto 382 de 2013, confirma aún más la posición adoptada por el suscrito para declararse impedido para estudiar el presente asunto y de todos aquellos cuya controversia sea la Bonificación Judicial regulada por los Decretos 382 y 383 de 2013.

³ Expediente No. 25-307-31-00-000-2018-00318-01 Demandante: Armando Maje Suarez vs Fiscalía General de la Nación – Magistrado Ponente: Samuel José Ramírez Poveda

⁴ Consejo de Estado -Providencia del 12 de julio de 2018

En mérito de lo expuesto, el **JUEZ VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE

PRIMERO.- MANIFESTAR el impedimento por parte del suscrito Juez, para conocer del presente asunto, lo anterior con fundamento en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) y la causal primera del artículo 141 de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P.), de conformidad con las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- REMITIR el expediente al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo de su competencia, de conformidad con el numeral 2° del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, por considerar que los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, se encuentran impedidos para conocer del presente asunto, por asistir interés directo en las resultas del proceso de acuerdo a la causal 1ª del artículo 141 del Código General del Proceso, a efecto de que si lo estima procedente, designe el respectivo conjuez.

TERCERO.- Por Secretaría, déjense las anotaciones pertinentes y realícese la respectiva compensación del expediente ante la Oficina de Apoyo Judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

| |
|--|
|  JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO notifico a las partes la providencia anterior hoy 19 DE MARZO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA |
|--|

